

Servicio Integrado de Información Arrocería
(04 de agosto 10)

Diario Extra

- **Y que se expone a sanciones comerciales por violar normas de OMC GOBIERNO URGIDO POR CORREGIR EXCESO EN SUBSIDIOS AGRÍCOLAS**

Recomendación de la administración anterior es revisar el modelo de fijación en el precio del arroz.

MARCELINO RIVERA SALAZAR
mrivera@diarioextra.com

El Gobierno de la República realiza una intensa labor de búsqueda de soluciones para remediar el exceso a los límites de los subsidios agrícolas permitidos por la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Costa Rica sobrepasó, durante 2009, el límite de Medida Global de Ayuda Total Corriente, en un 475%, al dar subsidios al sector arrocería por \$91,7 millones.

Tal y como publicó DIARIO EXTRA, Costa Rica sobrepasó durante 2009 el límite de Medida Global de Ayuda Total Corriente en un 475%, al dar subsidios al sector arrocería por \$91,7 millones, cuando lo máximo permitido por la OMC para los países en desarrollo, lista en la que está el nuestro, es de \$15 millones 945 mil.

La proyección para este año es que los subsidios otorgados por Costa Rica al arroz alcanzarán los \$125 millones.

Ante esto, los países miembros de la OMC podrían imponer sanciones comerciales, como el aumento de impuestos a las importaciones.

El ministro de la Presidencia, Marco Vargas, reconoció ayer que el gobierno corre en busca de alguna solución para evitar castigos por parte de la OMC o de los países miembros.

“Es algo que ya conocemos a lo interno del gobierno y hemos intentado solucionar. Sobre el tema ya se han sentado a trabajar las ministras de Comercio, Anabel González, la de Agricultura, Gloria Abraham y la de Economía, Mayi Antillón” afirmó Vargas.

“El informe que tengo es que ya hay una solución para que el país no se vea afectado ni que se nos impongan sanciones”, remarcó Vargas.

DIARIO EXTRA quiso conocer a profundidad cuál sería esa solución, sin embargo ni González ni Abraham pudieron atender las consultas.

¿REVISARÁN PRECIO?

Esta violación a las normas de la OMC fue comunicada por medio de una carta a las Ministras mencionadas el 3 de mayo anterior por parte del entonces jerarca de Comercio, Marco Vinicio Ruiz, en la que subrayó que esta situación se arrastra desde 2006.

“Frente a esta situación, grave en extremo, y dado que el límite establecido en el marco de la OMC es jurídicamente vinculante para el país, recomiendo que se revise el precio administrado del arroz para que su aplicación en ningún caso haga que se exceda este límite”, puntualizó Ruiz a González, así como a Abraham y a Antillón.

DIPUTADOS CUESTIONARÁN A MINISTRA

En la Asamblea Legislativa replicó la noticia de que Costa Rica se expone a sanciones comerciales por no respetar los límites de subsidios agrícolas marcados por la Organización Mundial de Comercio.

El diputado del Partido Acción Ciudadana y miembro de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, Jorge Gamboa, manifestó que llamarán a cuentas a la ministra de Comercio Exterior, Anabel González.

“Es preocupante lo que pueda pasar, es un riesgo muy grande”, señaló.

Gamboa presentará la moción de convocatoria a González durante la sesión de la Comisión que tendrán hoy.

El legislador defendió también el sector arrocero y aseveró que “si el gobierno piensa eliminar la fijación del precio y dejarlo a la libre, sería algo fatal, sobre todo para los medianos y pequeños productores”.

“Creo que Marco Vinicio Ruiz, anterior ministro también debería darnos cuentas de por qué nunca se hizo nada por frenar esto. Lo que hizo fue alborotar el panal con una carta que dejó”, concluyó.

• Presidente de Conarroz

“SIN FIJACIÓN DE PRECIO ESTARÍAMOS EN CRISIS”

MARCELINO RIVERA SALAZAR

mrivera@diarioextra.com

El sector arrocero nacional reaccionó con sorpresa al enterarse que Costa Rica excede el límite de subsidios agrícolas permitidos por la Organización Mundial de Comercio (OMC) con su aporte a la producción de arroz, pues consideran que lo que reciben no puede calificarse como una ayuda.

El presidente de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), Eduardo Rojas, manifestó que contratarán una empresa especializada para que determine si cabe como subsidio.

Lo que subrayó Rojas es que eliminar la fijación del precio del arroz significaría una crisis dentro de ese sector agrícola.

“Siempre que el precio de un producto se ha liberado, ha representado la ruina para muchos agricultores”, dijo Rojas.

Aunque el gobierno no entrega dinero a los productores, ante la OMC justifica que el principal programa de ayuda interna distorsionante es el sostenimiento en el precio del arroz.

Para calcular el monto de esa ayuda, se compara el precio promedio fijado oficialmente cada año con un precio en el exterior de referencia que para Costa Rica, en el caso del arroz, es de \$223.78 por tonelada, según se definió en la Ronda de Uruguay de la OMC. La diferencia entre ambos se multiplica por la cantidad de toneladas métricas de la producción local.

Ese mecanismo, según Rojas, no puede verse como un aporte del Estado.

“Simplemente hay un precio al consumidor y unos costos en que incurre el agricultor”, dijo. El gobierno anterior tuvo una muy buena visión al fomentar la producción arrocera. Ya estamos llegando a la meta de producir el 70% del consumo local.



El presidente de Conarroz, Eduardo Rojas, considera que “puede haber un interés particular en que se termine la fijación de precios”.

“No quiero pensar que esos dizque subsidios se quieran reorientar a otro sector productivo. Lo vamos a estudiar. Aquí puede haber un interés particular en que se termine la fijación de precios a lo cual no estamos de acuerdo”, concluyó Rojas.

La Nación

ENTIDAD MANTIENE DÉFICIT DESDE HACE UNA DÉCADA

Permanente crisis del CNP pone en jaque al Gobierno

Deuda de ¢347 millones en alzas de salarios agrava desajuste financiero

Ministra Gloria Abraham afirmó que buscan salida urgente a problema

Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com 09:53 P.M. 03/08/2010

El 21 de mayo del 2001, cuando el entonces presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción (CNP), José Joaquín Acuña, denunció que la entidad se quedó sin recursos, el calvario financiero apenas había empezado.

La historia se repite hoy: el CNP proyecta un déficit de ¢3.300 millones a diciembre próximo, según un estudio a mayo pasado que conoció la junta directiva.

Varios son los Gobiernos que intentaron “hacer algo” con el Consejo. Las propuestas van desde reestructurarlo y darle nuevas funciones, pasan por fusionarlo con otra entidad y terminan en el cierre que prefieren algunos.

La actual ministra de Agricultura y Ganadería (MAG) y superior del CNP, Gloria Abraham, dijo que buscan salidas urgentes. Añadió que pronto las anunciará, pero prefirió no ahondar en detalles.

La más reciente manifestación de la crisis financiera es la deuda que el CNP tiene con los alrededor de 800 trabajadores: está atrasado en el pago de ¢347 millones en ajustes salariales que se acumularon solo entre enero y abril de este año.

A partir de mayo y hasta ahora, la entidad logró conseguir los recursos para atender esos pagos.

Pero queda al descubierto, otra vez, el hueco financiero que arrastra la institución y que ha tenido en jaque a los gobiernos.

En ocasiones anteriores, las transferencias de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) ayudaron a tapar ese hoyo y en otras las de urgencia del Ministerio de Hacienda.

Ninguna de estas parece estar disponible ahora. Las ventas de Fanal cayeron más del 50% en el primer semestre y en lugar de subir los aportes al CNP cada vez serán más bajos. El dinero de Hacienda tampoco pareciera factible en medio de un déficit fiscal creciente.

Cambio o cierre. Solo en el Gobierno anterior se presentaron tres proyectos de reestructuración de la entidad, el primero de ellos incluso con financiamiento en el Presupuesto Nacional, pero al final el dinero se destinó a otros propósitos.

Esta iniciativa, respaldada por el entonces presidente ejecutivo del CNP, José Francisco Oreamuno, y el titular del MAG, Alfredo Volio, llevaba al cierre luego de reubicar o pensionar a los empleados.

Después se presentó otra para relanzar el Consejo, añadirle funciones y buscarle financiamiento.

Al final del Gobierno pasado, se elaboró otro documento con la idea de fusionar al CNP con el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA).

Esta última entidad administra el Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (Cenada).

La idea ganó aceptación y pareciera ser una vía muy factible en este Gobierno.

La propuesta de fusión se respalda en el fuerte gasto que implica esa entidad, con un déficit anual cercano a los ¢3.000 millones desde hace casi una década, dicen quienes impulsan este cambio.

Ellos añaden que la entidad presenta poca orientación en sus programas y, por lo tanto, baja incidencia en sus propósitos básicos: orientación en mercadeo y comercialización para pequeños agricultores.

Eso es consecuencia y reflejo de los cambios en la presidencia ejecutiva. En los cuatro años de la administración pasada, hubo cuatro presidentes que tomaron el timón del CNP y otro que renunció sin siquiera juramentarse.

Pese a los diversos intentos de reestructuración en varios gobiernos, el problema del Consejo Nacional de Producción persiste y aún esta administración no tiene definido un plan.

La República

Posiciones antagónicas podrían complicar negociaciones de Costa Rica en proceso de integración con el istmo

Industriales y productores de alimentos pugnan por aranceles

Se acaba el tiempo para resolver diferendo

La industria alimentaria y productores agropecuarios se boxean, y el escenario de combate son los recientes intentos por acelerar el proceso de integración económica central. El principal punto de conflicto son las barreras arancelarias industriales, pero defendidas intensamente por los agricultores. Este último grupo acusa al réferi de tomar partido, en el Comercio Exterior (Comex) de favorecer la eliminación de negociaciones que finalmente Costa Rica respalda de cara al istmo.

Con este motivo se abrió un periodo de consultas donde se exponen sus posiciones en torno al arancel.

“Hemos renunciado al proceso de consulta, porque no se favorece a los interesados en que caigan las protecciones de pequeños y medianos productores”, explicó Alvaro Sáenz, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA). “El llamado de Comex, y vamos a llevar la defensa de los asociados hasta las consecuencias que ameriten”, sentenció. El periodo de consulta está planteado desde el pasado febrero hasta hoy.

Por su parte, en Comex defienden la necesidad de llevar a cabo un periodo de consulta que es idéntico a los que se llevan a cabo en otros sectores.

“En este caso particular tal definición involucra las eventuales técnicas que el país plantearía en el Subsistema”, agregó. La consulta fue hecha por LA REPUBLICA.

Del otro lado del cuadrilátero, los industriales de la agroindustria

CAFE CON POSICION INTERMEDIA

En medio de los polos que representan industriales y productores agropecuarios, los tostadores de café del país han manifestado su interés en que se concrete la integración centroamericana, pero señalando la necesidad de fortalecer la producción cafetera nacional.

Apoyando la gestión de Comex para aumentar la oferta de mercados que puedan acceder los exportadores locales, los tostadores reconocen una reducción del 45% en la oferta del grano costarricense, lo cual ha obligado a echar mano de café de la región, e incluso llegar a la reimportación del café tico, para suplir la demanda local.

Finalmente los tostadores abogan por que sea posible dar “un mayor valor agregado a la agrocadena cafetalera nacional”, a fin de ser más competitivos hacia fuera.

CORPORACION ARROCERA NACIONAL

CONARROZ

San José, Costa Rica

durante años se han mantenido barreras arancelarias que protegen a los productores agropecuarios, lo cual —a su criterio— termina afectando al sector productivo que ofrece alimentos terminados.

“El hecho de que algunos productos no estén desgravados para su importación, golpea directamente la producción alimentaria (...) el azúcar producida en Costa Rica, por ejemplo, es más cara aquí que en el extranjero; esas cosas no permiten competir eficientemente”, debatió Tomás Pozuelo, presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA).

Uno de los argumentos que lanza esta industria es que mientras existen tratados que permiten el ingreso de alimentos preparados, en el país los aranceles para la materia prima impiden que ellos compitan en igualdad de condiciones.

“Un ejemplo de esto es que en el resto de los países centroamericanos el impuesto de ingreso a la leche en polvo es del 15%, mientras que en Costa Rica es de un 60%”, agregó Pozuelo.

Ernesto Villalobos
evillalobos@larepublica.net